

E

Editorial

El costo de vivir en la ruralidad

El encarecimiento del transporte y la energía amenaza la subsistencia de miles de familias, que se sienten postergadas por el Estado.

El reciente incremento en el precio de los combustibles no representa únicamente una fluctuación económica para los habitantes de la provincia; constituye un golpe estructural a la viabilidad de la vida en el campo. Mientras en los centros urbanos el alza se percibe en el presupuesto mensual, en las zonas rurales de comunas como San Juan de la Costa, San Pablo o Puerto Octay, el impacto se traduce en una restricción directa a derechos fundamentales. La dependencia absoluta del diésel para la obtención de agua potable, la generación de electricidad y el transporte básico convierte cualquier variación de mercado en un factor de empobrecimiento inmediato. La realidad provincial es elocuente: con seis de siete comunas categorizadas como rurales, la postergación sistemática ha dejado a más de 52 mil personas bajo un modelo de subsistencia precario. El aumento de las tarifas de transporte público, que en algunos tramos ha escalado de forma abrupta, no sólo afecta el bolsillo, sino que limita el acceso a salud, educación y mercados locales. Para el pequeño productor, el costo de trasladar mercancías a Osorno ha comenzado a neutralizar las escasas ganancias, empujando a las economías familiares hacia un saldo negativo insostenible.

Resulta paradójico que el sector responsable de la seguridad alimentaria sea el que presente los indicadores sociales más críticos. Con una tasa de pobreza rural del 16,5% y una informalidad laboral que alcanza el 65%, la falta de políticas públicas con enfoque territorial es evidente. La ausencia de sucursales bancarias, farmacias y una red pública de agua potable —que obliga a miles de familias a depender de camiones aljibe— evidencia una gestión centralista que ignora la complejidad de habitar el sur de Chile.

El uso de generadores para servicios básicos es, quizás, el símbolo más crudo de esta brecha. En pleno siglo XXI, el alza del combustible obliga a familias de diversas localidades a racionar la luz y el agua. Esta “pobreza energética” no es un accidente, sino la consecuencia de un diseño de políticas que prioriza la densidad poblacional por sobre la equidad territorial. Si el Estado no implementa mecanismos de financiamiento diferenciados o subsidios específicos para el transporte y la producción rural, el destino inevitable será la migración forzada hacia las ciudades.